



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

NOTA INFORMATIVA Nº 71/2024

EL PLENO DEL TC ESTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO DE AMPARO DE JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ ROMÁN, CONDENADO EN EL CASO ERE DE ANDALUCÍA, Y DECLARA QUE SE HAN VULNERADO SUS DERECHOS A LA LEGALIDAD PENAL Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Jesús María Rodríguez Román contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenaron por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a la pena de 6 años y 2 meses de prisión, con accesorias, y 15 años y 2 días de inhabilitación, con accesorias. El Tribunal declara que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y al derecho a la presunción de inocencia y ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo.

Las sentencias condenatorias consideraron que Rodríguez Román, en su calidad, de viceconsejero de Justicia y Administración Pública y viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, participó en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2008; en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias por las que se incrementaban distintos programas y además, como miembro del Consejo Rector del IFA/IDEA, no hizo nada para impedir la firma de convenios particulares para el pago de las ayudas sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo. Según las sentencias impugnadas, mediante todas estas actuaciones el recurrente asumió la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 3.1 L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados, sin realizar actuación alguna tendente a evitar ese proceder ilícito.

I. La sentencia de la que ha sido ponente la Vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, declara que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el art. 25.1 CE. El art. 404 del Código Penal tipifica como delito que las autoridades o funcionarios públicos, a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo.

Según las sentencias impugnadas, dichos proyectos de ley en los que participó el recurrente eran ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento. En particular, porque incorporaban el uso de transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales, mediante la creación del programa 3.1 L en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma, desplazando la aplicación de la normativa de subvenciones. Del mismo modo, las resoluciones impugnadas consideran que las modificaciones presupuestarias para el pago de las ayudas sociolaborales se adoptaron también infringiendo la normativa presupuestaria.

El Tribunal, de acuerdo con lo sostenido por el Fiscal y con remisión a lo resuelto en la STC 93/2024, ha estimado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, y según han venido entendiendo tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. Ni un anteproyecto ni un proyecto de ley pueden someterse a un juicio de legalidad -en ese momento, al ser meras propuestas, son actos inexistentes para el Derecho- y, una vez aprobados, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.

El Pleno del TC declara que las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, al no considerar que fue el Parlamento de Andalucía el que, a iniciativa del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma, aprobó el nuevo sistema de presupuestación de las ayudas sociolaborales a través de las leyes de presupuestos y atribuir la aprobación del nuevo sistema de presupuestación a los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, desconocen la centralidad del Parlamento de Andalucía en el entramado institucional establecido en el Estatuto de Autonomía. Según la sentencia aprobada por el Tribunal, los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes.

El Tribunal analiza a continuación las distintas modificaciones presupuestarias en las que participó el recurrente concluyendo que no resulta imprevisible ni contrario al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) la condena por las realizadas en los programas 22 E (en los años 2000 y 2001) y 3.2 H (2004). Sin embargo, sí considera contraria al derecho a la legalidad penal la condena del recurrente por haber participado en la aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas al amparo del nuevo sistema de presupuestación aprobado por el Parlamento de Andalucía a través de la ley de presupuestos.

II. Por lo que se refiere al delito de malversación (art. 432 CP), la sentencia afirma, con base en las mismas razones que se acaban de exponer, que las resoluciones judiciales han realizado también una interpretación imprevisible del art. 432 CP que resulta lesiva del art. 25.1 CE (derecho a la legalidad penal) en relación con los hechos probados que se refieren globalmente a la forma de gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Según el Tribunal no es exigible una actuación *contra legem*, “esto es, una obligación de actuar para impedir la realización de actos que tienen expresa cobertura en las leyes de presupuestos en vigor”. Las sentencias impugnadas afirman que la finalidad del nuevo sistema de presupuestación tenía por objeto eludir la aplicación de la normativa de subvenciones; sin embargo, dado que dicho sistema fue aprobado por el Parlamento, no puede exigirse al recurrente que actuara en contra de lo previsto en las sucesivas leyes de presupuestos y en las memorias que las acompañaban.

Para el Tribunal, tal conclusión no puede extenderse a los hechos imputados al recurrente que no tenían cobertura legal: i) por un lado, a las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en el programa 22 E; ii) por otro, a las que tenían como objeto la disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos en el programa 3.1 L incluido en las sucesivas leyes de presupuestos.

No obstante, la sentencia constata que, aunque estas últimas conductas -las expuestas en el apartado ii)- pudieran ser consideradas constitutivas de un delito de malversación, como el demandante de amparo ha sido condenado por tal delito sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. La motivación judicial carece del desarrollo argumental suficiente para considerar probado que los hechos que se le imputan han sido cometidos por el

demandante, lo que supone una vulneración del referido derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Este derecho exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente, e impide que pueda trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes.

El Tribunal desestima las otras quejas formuladas por el demandante en su recurso de amparo.

En consecuencia, el Pleno estima parcialmente el recurso de amparo de Jesús María Rodríguez Román y retrotrae las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcobilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera. Por su parte, la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga ha anunciado voto particular concurrente.

Madrid, 3 de julio de 2024